

Cuando a fines de la década del 40 el Gobierno Nacional decidió iniciar la siembra de arroz en las sabanas del Estado Portuguesa, y cuando comenzó a realizar lo que en el futuro sería la Colonia Agrícola de Turén, quizás fueron pocos los que adivinaron la magnitud de aquellas dos empresas. Tal vez aquellos técnicos agropecuarios, y los que con ellos compusieron el núcleo primario del plan arrocero, en las noches sin luz de la pobre ciudad de Acarigua, nunca llegaron a imaginar que, a la vuelta de unos pocos años, aquella ciudad sin agua después de las siete de la noche "abriría rutas al progreso".

También hubiera sido interesante preguntar a esos inmigrantes que, desconociendo totalmente el idioma —en muchos casos— y sin más fortuna que una lejana esperanza, venían a sumergirse en el propio corazón de un país que desinteresadamente les había brindado hospitalidad.

Porque todos ellos, junto a los pobres escasos residentes de aquella zona, fueron el heterogéneo grupo que comenzó la mecanización agrícola en Venezuela.

Lo demás lo hizo el tiempo y las cifras (1):

Producto	Año 1959	Año 1966
Arroz	12.344 T. M.	110.592 T. M.
Ajonjolí	19.074 T. M.	58.074 T. M.
Maíz	31.403 T. M.	119.636 T. M.

—La privilegiada posición actual de Venezuela como tercer país en el Hemisferio Occidental con una tasa de crecimiento en la producción alimenticia del 7.4% anual.

Y no son sólo las cifras. El alto desarrollo de la agricultura en un país eminentemente productor de petróleo como Venezuela es fundamental. El petróleo se agota paulatinamente, la agricultura perdura tanto como sus suelos y el trabajo de los hombres. Esta importancia de la agricultura se acentúa aún más en estos momentos de subdesarrollo, cuando de la agricultura vive el 34% de la población venezolana.

Gran parte de este despertar agrícola se debe a lo que popularmente se conoce como "El Milagro de Portuguesa".

Ahora bien, este aspecto exterior del desarrollo de la región tiende a deslumbrar. Esas cifras magníficas, esa alta producción, tienden a crear una impresión de riqueza, de perfección, que en la realidad no existe. Y podríamos atrevernos a decir, sin lugar a dudas, que el milagro de Portuguesa está en crisis.

¿Por qué está en crisis? Son varias las causas y las trataremos de enumerar y explicar brevemente.

Factores económicos

Indudablemente que quienes dentro del Gobierno Nacional trazan los grandes planes económicos tienen en la mente una Venezuela minera e industrial y casi no contemplan la Venezuela agrícola. En el presupuesto de la Nación presentado al Congreso Nacional en el año 1968, sólo un 6,5% fue pedido y concedido para la Agricultura. Esto confirma, a las claras, que no es propiamente agrícola la mentalidad de los que realizan el presupuesto, y trae, como consecuencia directa, un escaso financiamiento oficial para los planes agrícolas y para los organismos que, dentro de la Nación, se ocupan de financiar a los agricultores. En Por-

Un milagro en crisis

por JOAQUIN PEREZ RODRIGUEZ

tuguesa, el financiamiento concedido este año para cumplir metas de producción fue notablemente bajo, tan notoriamente escaso, que motivó una carta abierta al señor Presidente de la República, por parte de las Asociaciones Rurales, donde se le manifestaba que con ese financiamiento oficial Venezuela tendría que importar de nuevo esos productos.

Producto	Crédito solicitado por el BAP Año 1968	Créditos concedidos Año 1968
Arroz	Bs. 35.365.800,00	Bs. 2.487.682,00
Maíz	Bs. 18.072.500,00	Bs. 2.216.436,00
Ajonjolí	Bs. 27.354.600,00	Bs. 15.647.748,00

En la actualidad, exceptuando los créditos de deforestación —escasamente concedidos— y los créditos de productividad —aún en fase de estudio—, todos los créditos que se

(1) MAC. Anuario Estadístico Agropecuario 1962-1966.

conceden para realizar labores agrícolas, tanto oficial como privadamente, son a un plazo máximo de 120 días y a una tasa de interés, tanto en un sector como en el otro, de un 12% o más.

No existen créditos a mediano o largo plazo para realizar labores de infraestructura como pueden ser: deforestación, nivelación, riego, caminos internos, etc., que no sólo elevarían el activo de las haciendas, sino que permitirían elevar la producción por unidad de trabajo. Es decir, que el agricultor portuenseño tiene que realizar este tipo de labores, en los que la inversión se recupera muy lentamente, de contado o a pagar en 6 meses y con un interés de, por lo menos, el 12% anual. Esto, de por sí, es antieconómico. Y todo hace que los agricultores tengan que realizar verdaderos malabarismos económicos para poder subsistir y a la vez realizar la próxima cosecha.

Claro está que aquí, como en otras facetas de la economía, no existe la fórmula mágica que solucione todos los problemas y la cosecha tan esperada, que todo lo habrá de solucionar por sí sola, nunca llega. Lo que en realidad sucede es que ante una cosecha mediocre, o buena, pero que no cubre toda la inversión realizada, hay que recurrir de nuevo a la banca, esta vez no para financiar la cosecha, sino para pagar las deudas de la cosecha anterior.

Así continúa el ciclo hasta que el suelo se agota sin haber podido pagar enteramente la inversión inicial. Llegado este momento, no queda otro remedio que buscar tierras nuevas y comenzar el trágico proceso que habrá de llevar de nuevo al punto desde donde se partió.

Costo de los cultivos

Otro agravante, dentro de esa situación, es el alto precio de todos aquellos productos necesarios para poder realizar el cultivo. Específicamente, dejando a un lado el costo de la semilla, el precio de los pesticidas y los servicios aéreos es alto. En el caso de los servicios aéreos, el aumento arbitrario de los precios casi no ha ocurrido debido a que la Asociación de Productores de Portuguesa es dueña de una compañía de servicios y los precios que esta compañía fija sirven de freno a las ambiciones alcistas de los demás.

No ocurre así con los pesticidas. Pesticida es aquel producto que sirve para combatir las plagas que azotan las cosechas (insecticidas) o las malas hierbas que ahogarían las plantas de los distintos cultivos (herbicidas). El aumento en el precio de estos productos sólo está regulado por la libre competencia y por la voluntad de las casas vendedoras o distribuidoras. El agricultor no tiene aquí la menor posibilidad de fijar o rebajar el precio, a pesar de ser éste el más fuerte de los renglones en la producción de cosechas.

En la cosecha de arroz, el importe de estos productos y su aplicación constituyen el 44,4% del costo total de la cosecha, el 54,4% en la de maíz y el 38,5% en la de ajonjolí (2). Pero además de fijar el precio a su arbitrio, las casas comerciales añaden un sobreprecio de un 30% que cubre las posibles pérdidas por falta de cobro. Este margen tiene que cubrirlo todo aquel que compre a crédito, así tenga un amplio record como buen pagador. Sólo en Acarigua y sus alrededores este sobreprecio se estima en Bs. 3.870.000 por año.

Un factor que aumenta este tipo de gastos inadecuados, ya que no sólo se pierde el importe del producto, sino que los daños infligidos al cultivo por las plagas o malas hierbas, en la mayoría de los casos, son irreversibles. La única orientación que tienen los agricultores para determinar qué producto y en qué cantidad hay que utilizar, proviene del extensionista agrícola, quien debe ser un empleado público totalmente imparcial en sus decisiones. Este tipo de exten-

sión oficial, a nivel empresarial, no existe. Esto hace que los únicos consejos que recibe el agricultor provienen de los técnicos de las distintas casas distribuidoras de productos y que, por muy objetivamente que trabajen, siempre lo harán con intención de penetrar un mercado, en función de venta.

Cuando se observó por primera vez en la zona un ataque serio de áfidos de la raíz, en el cultivo del arroz, el consejo técnico de algunas casas fue el de aplicar insecticidas sistémicos que, por otra parte, tienen un costo elevadísimo. Un número de agricultores siguió esta indicación. Debido a este problema, la Estación Experimental de Araure, por medio de su departamento de Entomología dirigido por el ingeniero agrónomo Guillermo Alvarado, decidió realizar una serie de ensayos sobre esta plaga. La conclusión fue tajante: ningún producto en plaza controlaba en lo absoluto esta plaga y sólo el riego por inundación era capaz de erradicarla.

Alto precio de la maquinaria

Por las características climáticas de la zona, las labores de preparación de tierras y siembra han de hacerse a lo sumo en uno o dos meses seguidos y por dos veces al año. A veces, en cuestión de unos pocos días, para cada siembra o cosecha. La razón es simple: las cosechas del tiempo lluvioso (llamadas cosechas de invierno) han de sembrarse antes de que comience la estación lluviosa porque, una vez comenzada ésta, por el tipo de terreno sumamente pesado, no se puede entrar en los campos con ningún equipo y, suponiendo que se pueda entrar, las labores de preparación de la tierra, con el terreno muy mojado, serían pésimas.

Por otra parte, las siembras de tiempo seco (llamada época de verano) deben hacerse sin peligro de una lluvia inminente que arruinaría la semilla, pero por la misma textura del suelo y debido a los fuertes vientos, si transcurren dos o tres semanas sin sembrar, la tierra se seca y la semilla no germina, lo cual obliga a los agricultores a tener y mantener una gran cantidad de equipos. Esa maquinaria va a ser utilizada intensamente, agobiadamente, las veinticuatro horas del día, durante tres, diez o sesenta días. Después, los ocho meses restantes, quedará totalmente inactiva. El promedio del capital invertido en maquinaria es de Bs. 129,00 por hectárea de superficie útil (3), y si calculamos la cantidad invertida en las 40.000 hectáreas de la zona de Acarigua, esto daría una gran inversión, sólo en esta zona, de Bs. 45.160.000,00.

Pero, además, esta gran cantidad de equipo necesario, violentamente tratado y después paralizado durante meses y meses, cada día cuesta más. Un tractor de 100 caballos de fuerza (HP), que hace tre años costaba de Bs. 30 a 36.000, dependiendo de la marca, en la actualidad no baja de 60.000 bolívares, o sea, tranquilamente han duplicado su precio. Igual o peor ha sucedido con las cosechadoras combinadas, sembradoras, aperos de labranza, etc.

Dentro del alto costo de la maquinaria hay que añadir el costo de los repuestos. Cuando una pieza comprada en los Estados Unidos el factor de conversión de bolívares a dólares es de 4,50 bolívares por cada dólar. Estas mismas piezas, añadiendo solamente el precio del flete y los seguros, que en flete aéreo no asciende por encima de Bs. 0,50 por cada dólar, es suministrada al agricultor a razón de Bs. 11 por cada dólar, llegando en algunos casos (piezas pequeñas o de marcas especiales) hasta Bs. 30 por cada dólar. Es decir, el agricultor en todos los casos paga un 220% más

(2) Estudio Regional Técnico Económico sobre administración de fincas. Asociación de Productores Rurales de Portuguesa, marzo 1968.

(3) Idem.

de lo que costaba originalmente esa pieza puesta en Venezuela (ya incluidos flete y seguro); en algunos casos llega a pagar al importador o al distribuidor hasta un 600% más. También suele ocurrir que toda pieza de repuesto destinada a la agricultura, por el solo hecho de su fin, se vende a un precio mucho mayor.

Citemos un ejemplo: Los terminales de dirección de un tractor de cien caballos, vendidos al por mayor y con precio especial, cuestan Bs. 30,16 cada uno. Este mismo terminal, del mismo material, de las mismas medidas, del mismo año y de la misma fábrica, pero para camión, cuesta sólo Bs. 12.

Muchas veces las compañías que se ocupan de distribuir la maquinaria agrícola no mantienen un stock suficiente de piezas de repuesto. Otras veces la tienen, pero en piezas no desglosables. Es decir que si un agricultor necesita una empaadura de la tapa de válvulas de un motor, que costaría sola Bs. 20, tiene que comprar todo el juego, que, además, de ser totalmente innecesario, cuesta Bs. 120.

Bajos precios de los productos agrícolas

Como irónica contrapartida a todos estos altos precios para obtener un producto agrícola, precios que suben constantemente sin regulación alguna; los precios agrícolas se encuentran congelados, algunos desde hace quince años. En realidad, tratando de proteger al agricultor, se creó la política de los precios mínimos. Pero llevada a la práctica, esta política, en realidad, funciona como de precios topes, ya que los industriales y los organismos estatales nunca pagan más de esos precios por los productos y en muchos casos, como explicaremos más adelante, los precios son sustancialmente menores. Cuando un agricultor entrega un producto —hablamos aquí particularmente de maíz, arroz y ajonjolí, que son los principales productos de la zona— a un comerciante o al BAP por medio de ADAGRO (que es el organismo encargado de recibir y almacenar los productos), éste es sometido a un análisis de humedad e impurezas, fundamentalmente, a fin de saber cuánto habrá que descontar por aquello de que, a pesar de arrojar un peso determinado en la romana de recepción, es agua y basura y no producto.

En el caso del maíz y el arroz, este examen es inapelable o de muy difícil apelación, y lo era así en el ajonjolí hasta el año pasado, cuando comenzó a funcionar un laboratorio de arbitraje en manos del Fondo Nacional del Ajonjolí (organismo constituido con aportes de los industriales, el Gobierno y los agricultores). Muchas veces el descuento resultante de este análisis inapelable pasaba del 10% de la cantidad bruta del producto entregado. Esto significa que por cada 100 kilogramos de arroz entregado, el análisis arrojaba más de 10 kilos de agua y basura. Si vemos que la cosecha de arroz del año 1967 ascendió a 120 millones de kilogramos, es de suponer que 12 millones de kilogramos fueron descontados **INAPELABLEMENTE** (a Bs. 0,60 el kilogramo da un gran total de Bs. 7.200.000). El año pasado, en la asamblea anual de FEDEAGRO, las asociaciones de productores de Barinas, Turén y Portuguesa enviaron un telegrama al Presidente de la República y en el mismo se pedía una amplia investigación en los descuentos que ADAGRO venía realizando. De esta gestión surgió, por parte del Ejecutivo, una investigación que aún no ha concluido (4).

Aunque no hay pruebas palpables y exponer una conclusión definitiva sería arriesgado, es vox-populi en toda la zona el mecanismo de esta irregularidad. Si a un número considerable de camiones entregados por los productores se les descontaba una cantidad mayor por impurezas y humedad que la que en realidad tenía, esto daría un superávit

en los almacenes que se justificaba ante cualquier inventario de existencias por medio de comprobantes de recepción de camiones inexistentes en la realidad. El pago de estos camiones fantasmas se lo hacían a ciertos agricultores previamente comprometidos, y el producto de este robo se dividía entre el agricultor complicado y el funcionario inescrupuloso.

También, en arroz y maíz, el sistema de pago al agricultor es, en realidad, una rebaja de precios. El BAP entrega, con la liquidación del producto, el 50% del valor del mismo, y el otro 50% lo reparte en letras a 60, 90 y 120 días, y los intereses corren por cuenta del agricultor. Aprovechando esta situación, muchos comerciantes ofrecen pagar de contado, pero a un precio inferior. En el caso del ajonjolí, por el mero hecho de facilitar la recepción del producto, bajaron inconsultamente el precio en un 6%. Esto no les impidió aumentar el precio en Portuguesa del aceite de ajonjolí en un 11% en los últimos tres meses.

Baja productividad

Aunque no sería lo más justo, todo lo anterior sería soportable desde el punto de vista económico si existiera una alta productividad por hectárea sembrada. La realidad es otra. El espejismo de la gran producción en los llanos de Portuguesa se debe al cultivo extensivo de los productos. Los aumentos de producción que se suceden año tras año no reflejan un triunfo de los agricultores en el mismo número de hectáreas sembradas, sino una inversión mayor para poner a producir más hectáreas con los mismos bajos rendimientos. Esto se lograría con créditos a largo plazo que permitan realizar sistemas de riego, drenajes, etc. Planes de electrificación rural se hacen cada vez más necesarios. Construcción y mejoramiento de vías de penetración. Estudios de fertilidad de los suelos y recomendaciones adecuadas sobre abonamiento. Posibilidades de pronósticos del tiempo que ayuden al agricultor a trabajar sin la angustia del agua o la sequía imprevisible.

¿Qué nos espera?

Sólo dos posibilidades caben: la quiebra de la zona, con la pérdida de material humano, de tiempo y de divisas que la misma acarrearía, o la consolidación. Este año el BAP comenzó con gran empuje un vasto plan para aumentar la productividad. Si el mismo triunfa, haciendo de las cosechas operaciones rentables; si la electrificación y la vialidad rural se llevan adelante para, además de bajar los costos, hacer la vida del agricultor más agradable y al menos comparable a la del trabajador de la ciudad. Si los precios de los insumos y maquinarias se normalizan por medio de cooperativas o empresas de los productores. Si el mercadeo de los productos se purifica de sus defectos y se hace más directamente o con mayor participación de los agricultores. Si se crean factores de estabilidad económica tales como cultivos más duraderos (caña de azúcar, frutales, etc.). Si se instaura el seguro agrícola. Si, en fin, se sitúa al agricultor en su verdadera posición de persona de gran utilidad a la Patria, tendremos entonces aquello que los primeros técnicos o inmigrantes tal vez no lograron siquiera prever: el verdadero Milagro de Portuguesa.

(4) Diarios "El Universal" y "El Nacional", 20 de enero de 1968. Diario "El Universal", junio 6 de 1968.